

Introducción

El Observatorio Nacional de la Gobernabilidad del Centro de Investigaciones de la Comunicación se ha mantenido activo durante el año 2012 dando seguimiento a los aspectos clave del proceso político en Nicaragua. En esta oportunidad presenta un análisis sobre las recién pasadas elecciones municipales y otros aspectos clave de la democracia y la gobernabilidad correspondientes al período julio - noviembre de 2012. El objetivo es que este informe sea útil para los distintos actores sociales del país, especialmente para los actores de sociedad civil, a fin de que cuenten con insumos para la definición de sus estrategias de acción, especialmente ahora que los resultados electorales siguen confirmando la tendencia regresiva del proceso democrático en el país.

El presente informe se divide en dos partes. La primera de ellas hace un análisis del proceso electoral municipal de este año 2012 a partir de algunas variables clave como la organización y conducción del proceso electoral mismo, la cedulação y verificación del padrón electoral, el ejercicio del sufragio el propio día de las elecciones, los resultados, los índices de participación y abstención. En la segunda parte se analiza la tendencia más general del proceso político del país a partir de otras variables como los actores y acontecimientos en el ámbito del sistema político, el ejercicio de los derechos ciudadanos y la influencia de actores y acontecimientos internacionales en la situación del país.

I. Antecedentes

Uno de los acontecimientos más importantes en el proceso político nacional durante el año 2012, fueron las recién pasadas elecciones municipales. A raíz de los resultados de las elecciones presidenciales realizadas en el año 2011, prácticamente todos los actores económicos y sociales han coincidido en señalar la necesidad de realizar un cambio profundo en el sistema electoral del país considerando las graves irregularidades que presenta. De manera que este nuevo ejercicio electoral más que expectativas en realidad generó escepticismo tanto entre la ciudadanía como entre actores nacionales y locales, incluidos los propios gobiernos municipales. Desde el punto de vista de diversos actores sociales, la forma en que se desarrollara el proceso electoral municipal de este año sería la última palada de tierra para enterrar definitivamente el sistema electoral. Las razones de ese escepticismo se encuentran en los antecedentes de los procesos locales y en los del proceso político del país en materia de democracia y gobernabilidad.

Durante las últimas dos décadas, numerosos actores sociales, económicos y políticos desarrollaron diversos esfuerzos para promover los procesos de fortalecimiento de la gestión pública a nivel local, es decir, en los municipios. Los avances más importantes se produjeron alrededor de la autonomía de los gobiernos municipales, la descentralización de la gestión pública y el fortalecimiento de los procesos de participación ciudadana en el nivel local. Un hito de estos procesos fue la separación de las elecciones municipales de las nacionales a partir del año 2000. Ese acontecimiento le dio una

nueva dimensión e importancia tanto a la gestión pública local como a los propios gobiernos municipales, pues los ponía de cara a los ciudadanos y ciudadanas de cada municipio.

El avance de estos procesos se estancó e involucionó a partir del año 2007, con la llegada de Daniel Ortega a la presidencia y a raíz de los graves retrocesos democráticos que comenzó a vivir el país desde entonces. Muy tempranamente, en el año 2008, las elecciones municipales se convirtieron en un burdo ensayo del fraude electoral que Daniel Ortega en contubernio con el Consejo Supremo Electoral perpetraría en el 2011. Además de la violencia electoral, diversos actores señalaron graves irregularidades del sistema electoral que no fueron corregidas por el CSE, entre ellas: la falta de depuración el padrón electoral; la falta de entrega de cédulas de identidad a ciudadanos como requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, y control del aparato electoral por el partido de gobierno. En las elecciones municipales del 2008, el FSLN logró un control casi total de los gobiernos municipales en todo el país, aun cuando en unas 40 localidades se cometieron graves irregularidades y se instalaron gobiernos municipales afines al partido de gobierno de dudosa legalidad y legitimidad.

Las anomalías del proceso electoral del 2008 y la violencia política se repitieron e incrementaron en las elecciones presidenciales del 2011 comenzando con la imposición de la candidatura presidencial de Daniel Ortega a pesar de la prohibición expresa de la Constitución Política del país y culminaron con el fraude y los resultados electorales que le aseguraron otro período presidencial. El escenario político que se configuró entonces ha quedado marcado entonces por los siguientes elementos:

- La naturaleza del régimen político que se caracteriza por ser autoritario y de facto. Las evidencias de esa naturaleza se encuentran en: las constantes violaciones a la Constitución Política, el orden jurídico y el Estado de Derecho; la centralización del poder en la figura del presidente y su esposa y el quiebre del necesario balance entre los poderes estatales ahora subordinados a la voluntad presidencial, especialmente en el caso del órgano electoral; la discrecionalidad de las decisiones de la pareja presidencial y la subordinación de los recursos y la institucionalidad gubernamental a esas decisiones.
- La debilidad de la oposición que se encuentra dividida entre los acomodados, los partidos zancudos y los que tienen posiciones verdaderamente críticas. Ninguno de estos grupos ha logrado construir una propuesta y un liderazgo alternativo con credibilidad y legitimidad dentro de la ciudadanía.
- El ejercicio de los derechos ciudadanos, los cuales se han venido restringiendo aceleradamente desde el año 2007 especialmente en el caso de: la libertad de expresión y la libertad de prensa; la libertad de movilización y protesta ciudadana; la libertad de organización y de participación en los asuntos públicos; y el principio fundamental del sufragio electoral.
- La continuidad del modelo económico a través de la ejecución de políticas económicas de corte neoliberal y el surgimiento de un nuevo grupo de poder económico vinculado a la pareja presidencial que ha construido monopolios alrededor de los principales ejes de la economía del país y se ha apropiado de los fondos recibidos de la cooperación venezolana.

De ahí la complejidad de las elecciones municipales de este año en relación a la validez del ejercicio del voto como mecanismo democrático para elegir a los gobernantes y como último recurso disponible para dirimir las diferencias políticas del país, pero además, como la expresión más clara de un régimen político autoritario.

II. Las elecciones municipales 2012

En este apartado se analiza el proceso de elección de autoridades municipales que transcurrió durante este año. Entre los aspectos considerados se encuentran: la organización y conducción del proceso electoral, la entrega de cédulas y la verificación del padrón electoral, las condiciones para el ejercicio del sufragio universal por parte de los ciudadanos, los resultados de las votaciones y las reacciones inmediatas de diferentes actores.

2.1. Organización y conducción del proceso electoral

Las elecciones municipales realizadas el 4 de noviembre pasado, fueron organizadas y conducidas bajo el estigma del fraude electoral ocurrido en el proceso de elecciones presidenciales del año 2011. Sin haber corregido los graves errores señalados en numerosas ocasiones por diferentes organismos de observación nacional y por los observadores internacionales, y sin considerar los altos niveles de desconfianza y falta de credibilidad de la población, el CSE se aprestó a organizar este nuevo ejercicio electoral. Varios de los partidos de oposición y diversos actores de sociedad civil urgieron al órgano electoral a realizar reformas en el sistema y la ley electoral para devolver la credibilidad del sistema, pero los magistrados se negaron a hacer cambios. Otros poderes del estado como la misma presidencia y la Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, se negaron a elegir un nuevo CSE y mantuvieron en sus cargos a los magistrados instalados de facto por un decreto presidencial desde hace dos años.

La imagen y credibilidad del CSE se deterioró aún más cuando se conoció el involucramiento del magistrado electoral Julio Osuna, como integrante de una banda de narcotraficantes nicaragüenses. El magistrado se encargaba, entre otras cosas, de trasladar drogas y dinero a Costa Rica en vehículos del CSE y elaborar cédulas de identidad falsas para otros narcotraficantes. Para esto, Osuna contaba con la colaboración de otros funcionarios dentro del mismo CSE y aunque fue condenado mediante un juicio, los demás magistrados del CSE decidieron no realizar ninguna investigación interna tal como lo establecen los procedimientos del sistema de control de la administración pública.

Desde antes y durante la campaña se mantuvo el control partidario sobre el aparato electoral, tal como se pudo apreciar no solamente en las declaraciones públicas de los magistrados del CSE, sino también en la composición de las JRV y la activa participación de integrantes del partido de gobierno en las distintas actividades como la cedulación y la verificación del padrón electoral. Otro hecho que le restó credibilidad al proceso fue la decisión del CSE de aceptar las candidaturas de diferentes alcaldes del FSLN para reelegirse en el cargo, a pesar que la Constitución se los prohíbe al igual que al presidente.

La reforma de la Ley de Municipios, Ley 40, por parte de la Asamblea Nacional contribuyó a deteriorar la poca credibilidad de los ciudadanos en las elecciones. En abril de 2012, la Ley fue reformada para obligar a los partidos políticos a presentar igual cantidad de candidatos hombres y mujeres, mientras que en junio de ese mismo año fue nuevamente reformada para introducir la figura de los “Concejos Municipales Ampliados”, que triplica la cantidad de concejales pero deja a la decisión del Ejecutivo los criterios para definir las atribuciones, funciones y otros aspectos relacionados con esta ampliación. Ambas reformas generaron un fuerte debate nacional por su

contenido, pero además, porque debilitaron la Ley de Municipios y porque el procedimiento seguido no fue transparente.

La campaña electoral abrió en estas condiciones y con los permanentes planteamientos públicos de diversas organizaciones como el Grupo Promotor para las Reformas Electorales, el Grupo Cívico Ética y Transparencia y el Ipade, sobre la necesidad de devolver la credibilidad al sistema y al órgano electoral, así como la necesidad urgente de reformar la Ley Electoral.

2.2. Cedulación y padrón electoral

Dos aspectos vinculados con el ejercicio del voto en Nicaragua son la emisión de las cédulas de identidad para los ciudadanos porque es un requisito indispensable para ello, y la verificación del padrón electoral previo a las votaciones. Durante las elecciones del 2011 ambos fueron señalados como graves deficiencias por parte del CSE y como dos mecanismos para cometer el fraude de ese año.

Para estas elecciones municipales persistieron los problemas y señalamientos críticos en relación con los aspectos. En el caso de la elaboración y entrega de cédulas, diferentes partidos políticos participantes en la competencia electoral y otros organismos de sociedad civil denunciaron públicamente que funcionarios del CSE en diferentes localidades realizaban una cedulación selectiva a personas simpatizantes del FSLN y que a personas no simpatizantes les negaban las cédulas. Diversos reportes periodísticos señalaron este tipo de anomalías en municipios de Nueva Segovia, Jinotega, Carazo, la RAAN, Boaco, entre otros departamentos del país.

Por su parte, el CSE extendió el plazo para la solicitud y emisión de cédulas hasta el mes de agosto a fin de que los ciudadanos pudiesen obtener su documento de identidad antes de las votaciones programadas para el 04 de noviembre, para lo cual instaló puestos móviles de cedulación en todo el país. Sin embargo, una actitud de indiferencia respecto al proceso de parte de los ciudadanos pesó y muy pocos ciudadanos asistieron a solicitar su cédula. De acuerdo a los informes del mismo CSE, en ese período se recibieron 15,384 solicitudes de cédulas nuevas; 1,530 solicitudes de reposición de cédulas, de las cuales se entregaron 7,139; mientras que a estos datos se sumaron 130,875 solicitudes realizadas entre enero y el 6 agosto del 2012, para totalizar más de 146,000 solicitudes de nuevas cédulas, de las cuales se entregaron 98,426 documentos de identidad durante el año (Alvarez L. , 2012). Los datos fueron puestos en duda por los partidos de oposición, mientras el Ipade señaló una serie de dificultades y problemas¹, tales como:

Tabla 1: Principales problemas y dificultades para la cedulación

- No apertura total de oficinas de cedulación en más de 40 municipios.
- Interrupciones diarias en atención a ciudadanos en oficinas de cedulación en más de 70 municipios.
- Falta de materiales para cedular.
- Falta de entrega de comprobantes.

Fuente: (Ipade, 2012).

¹ Ver: (Potosme, 2012), (Picón Duarte, Ipade: anomalías en cedulación, 2012) e (Ipade, 2012).

La víspera de las elecciones, reportes periodísticos (Alvarez L. , 2012) recogieron las declaraciones de un magistrado electoral indicando que cerca de 88 mil cédulas no fueron retiradas por los ciudadanos en todo el país.

Otro aspecto importante previo a las votaciones es la verificación del padrón electoral, la cual se realizó a finales del mes de julio de 2012. Diversas organizaciones de observaciones habían advertido antes sobre la necesidad de depurar el padrón para evitar anomalías el día de las elecciones y transparentar el ejercicio del sufragio. El proceso de verificación se realizó en relativa calma, sin embargo se reportaron numerosas denuncias de los partidos políticos por el control partidario del FSLN sobre los centros de verificación y los impedimentos para que fiscales de los partidos no oficialistas pudieran observar el proceso. Además, los medios de comunicación reportaron una escasa participación de los ciudadanos durante la verificación. De acuerdo con el CSE, se verificaron un 25.27 % de ciudadanos en edad de votar; mientras partidos políticos y organismos de observación estimaban la participación en 10 % y 15 %, respectivamente².

Posterior a la verificación, el PLI denunció que el CSE estaba manipulando el padrón electoral para favorecer a los candidatos del partido de gobierno y que la decisión de utilizar un padrón activo y uno pasivo el día de las votaciones era una estrategia para desanimar y desactivar el voto (Sirias, 2012).

2.3.Desarrollo de la campaña

En el transcurso de la campaña se destacaron algunas irregularidades como las numerosas impugnaciones de los partidos políticos a las listas de candidatos por usurpación de identidad, personas que corrían con más de una candidatura y varias personas fallecidas incluidas en las listas (La Prensa, 2012). El CSE deslindó responsabilidades sobre estas denuncias, especialmente las referidas a los nombres de personas fallecidas en las listas de candidatos (Agencia EFE, 2012).A lo interno del FSLN también se produjeron numerosas protestas en diferentes municipios del país por la imposición de candidatos a alcaldes y concejales que no gozaban de la simpatía de los militantes del partido. Las protestas se produjeron al menos en 35 municipios y los casos más relevantes fueron: Nindirí, Tipitapa, Rancho Grande, Chinandega y El Realejo.

Tabla 2: Protestas por "dedazos" en el FSLN

Madriz: Telpaneca, Yalagüina, Somoto
Nueva Segovia: Jalapa, Quilalí, Ocotal
Estelí: Condega, Pueblo Nuevo
Masaya: Tisma, Masaya, Nindirí
Granada: Nandaime.
Rivas: Moyogalpa y Potosí
Carazo: Diriamba.
RAAS: Desembocadura del Río Grande
Jinotega: La Concordia, Yalí, San Rafael del Norte
Matagalpa: Rancho Grande.
Chinandega: Chinandega, El Realejo, Villanueva, El Viejo,
Posoltega, Chichigalpa y Corinto.
León: Nagarote, El Jicaral, Quezalguaque
Managua: Tipitapa y Ciudad Sandino.

Fuente: diarios nacionales.

² Ver: (Picón Duarte, 2012), (Alvarez L. , 2012) e (Ipade, 2012).

En algunos de los casos, las protestas fueron sumamente violentas como en el caso de Tipitapa, Los Brasiles, Rancho Grande y Chinandega, sitios en los cuales grupos de partidarios oficialistas se enfrentaron abiertamente con la policía. En otros casos, los simpatizantes del gobierno organizaron marchas a la Secretaría del FSLN para protestar en contra de las designaciones de candidatos³. Las constantes y violentas protestas le costaron el cargo a Nelson Artola, director del FISE y delegado del presidente Ortega y su esposa para anunciar las designaciones; sin embargo, la sustitución del funcionario no logró convencer a los protestantes y en muchos casos anunciaron su decisión de no votar o asistir a las urnas el día de las elecciones para depositar un “voto de castigo” en contra del FSLN. Para poner punto final a la protesta, el CSE terminó adoptando la decisión de eliminar de las boletas las fotografías de los candidatos a alcaldes coincidiendo con el argumento del gobierno y con la estrategia de campaña del FSLN (Alvarez L. , 2012).

Mientras tanto, las posiciones de diversos actores sociales se dividieron respecto al ejercicio del voto. Diversas organizaciones de la sociedad civil nacionales y locales, decidieron realizar campañas cívicas porque consideraron que el proceso electoral no brindaba las condiciones básicas para ejercer ese derecho de forma transparente, pero además porque consideraron que no había garantías suficientes para que se respetara la voluntad ciudadana. Mientras tanto, actores como el COSEP, el Ipade y un sector de las iglesias evangélicas llamaron a los ciudadanos a votar. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, por su parte, emitió un mensaje en el que instaba a los ciudadanos a decidir sobre la base de su conciencia si ejercían el derecho al voto o se abstendían de ello (Conferencia Episcopal de Nicaragua, 2012).

Un aspecto muy controvertido de las elecciones presidenciales del 2011 fue la observación electoral por parte de organismos nacionales e internacionales. Para este proceso electoral, los organismos de observación nacionales como el Ipade, Ética y Transparencia y Hagamos Democracia se propusieron realizar un tipo diferente de observación que se enfocaba más en las condiciones y garantías del proceso y no tanto en el conteo de los resultados luego del sufragio, de manera que activaron sus redes de observadores en todo el país así como diversos recursos para el monitoreo y la denuncia ciudadana, tales como plataformas digitales (Ética y Transparencia, 2012). Estas organizaciones decidieron participar sin solicitar autorización al CSE, mientras que el CNU si fue autorizado por el órgano electoral. En el caso de los “acompañantes” internacionales, el presidente del CSE anunció la participación de observadores delegados de UNASUR, Grupo de Tikal, CEELA y la OEA.

De acuerdo a los informes de las diferentes organizaciones de observadores, no se presentaron mayores dificultades para la realización de su labor el día de las elecciones, aunque el Ipade reportó rechazos y amenazas durante el proceso de verificación del padrón electoral (Ipade, 2012), realizado varios meses antes de las votaciones.

2.4.Sufragio con garantías

Desde antes que iniciara la campaña electoral por las municipales, los distintos partidos políticos participantes denunciaron el control que el partido de gobierno tenía sobre las JRV y la complicidad del CSE al conformarlas mayoritariamente con integrantes de ese partido. En el transcurso de la campaña también se denunció la integración de miembros del FSLN como fiscales representantes de otros partidos políticos. A pesar de las denuncias no hubo mayores variaciones en la composición de las JRV, de tal manera que el partido de gobierno controlaba prácticamente todo el tendido

³ Ver: (Martínez & López, 2012), (Cruz & Potosme, 2012), (Aragón, León, & Potosme, 2012) y (Miranda Aburto, Rebelión contra "dedazo" en el FSLN, 2012).

electoral del país. En el mes de octubre, el FSLN realizó un simulacro de votaciones en todo el país con el cual pretendían adiestrar a su militancia para el día de las elecciones. De acuerdo a diferentes reportes periodísticos, el ejercicio consistió más bien en una verificación del padrón electoral que maneja el partido de gobierno⁴. Para otros sectores, especialmente para la oposición, fue un ejercicio de organización del fraude.

En la víspera de las elecciones, los partidos de oposición participantes en la contienda electoral denunciaron públicamente diferentes anomalías y amenazas en todo el país, tales como intimidaciones a sus simpatizantes, candidatos y fiscales, tardanza y negligencia en la acreditación de los fiscales y enfrentamientos entre simpatizantes partidarios. Los casos más graves se presentaron en el municipio de Quezalguaque, Siuna y Matagalpa⁵.

Frente a la alta desconfianza, la gran cantidad de anomalías y el control partidario del gobierno sobre el proceso electoral, diversos actores anticiparon un alto porcentaje de abstenciones para el día de las votaciones y valoraron que no existían condiciones para la realización del proceso electoral. Tal fue el caso del MRS (MRS, 2012), el Grupo Promotor por las Reformas Electorales, Ética y Transparencia, y el Movimiento por Nicaragua (Miranda Aburto, 2012).

El propio día de las elecciones, los diferentes medios de comunicación reportaron la poca afluencia de ciudadanos a las urnas, lo cual parecía confirmar los pronósticos que se habían realizado con anticipación respecto a la participación electoral y la abstención. En el primer momento, los reportes periodísticos no reportaron mayores incidentes, sin embargo inmediatamente después que el CSE anunció los resultados, se suscitaron acontecimientos de violencia electoral en diferentes lugares del país a causa de las actuaciones fraudulentas en numerosas JRV y las anomalías presentadas en diferentes municipios del país, una vez que las juntas comenzaron a cerrar y a contabilizar los votos depositados⁶.

Entre las diferentes anomalías y fraudes ocurridos el propio día de las elecciones y denunciados por los partidos participantes, se encontraron: expulsión o impedimento para que los fiscales de los partidos de oposición entraran a las JRV, ciudadanos que no aparecían en el padrón electoral, negación del voto a ciudadanos, ejercicio de doble voto a partidarios de gobierno, alteración de resultados en actas de votación a fin de favorecer a los candidatos del partido de gobierno, manipulación de boletas y actas, control partidario de las JRV⁷. De acuerdo con (Ética y Transparencia, 2012, pág. 2), durante todo el proceso electoral se presentaron indicios de fraude y se incumplieron de forma intencional al menos 16 de 18 requisitos mínimos de calidad para los procesos electorales democráticos.

2.5. Resultados electorales

De acuerdo con los datos publicados por el CSE, los pronósticos del FSLN se cumplieron, de tal manera que el partido de gobierno alcanzó el 67 % de los votos y se instaló en 134 alcaldías municipales, entre ellas todas las cabeceras departamentales. El último informe emitido por el CSE fue el día 05 de noviembre con el 98.7 % de las actas escrutadas.

⁴Ver: (Picón & Martínez, 2012) y (Carranza, 2012).

⁵Ver, entre otros: (Rivera, 2012), (Trinchera de la noticia, 2012), (Alvarez L. , 2012) y (López Hernández, Vargas, & Martínez, 2012).

⁶ Entre otros reportes periodísticos, ver: (Largaespada, 2012), (Vásquez, 2012), (Aragón Rodríguez, 2012) y (Olivas, 2012).

⁷ Ver los informes presentados por: (Olivares, 2012), (Ética y Transparencia, 2012) e (Ipade, 2012).

Tabla 3: Resultados electorales alcaldes y vice alcaldes. 2012

Partido político	Cantidad votos	Alcaldías
PLC	69,213	2
FSLN	824,275	134
ALN	7,739	1
PLI	175,356	11
Yatama		3

Fuente: Diferentes medios de comunicación.

Los resultados fueron impugnados por el PLI y el PLC, quienes argumentaron que se había cometido fraude al menos en 6 municipios del país, entre ellos: La Cruz de Río Grande, Ciudad Darío, Matiguás, El Almendro, Wiwilí de Jinotega, Paiwas y Yalí.

En el caso de los candidatos a concejales, el CSE también anunció una mayoría de votos favorables al FSLN, con lo cual el partido de gobierno cuenta con mayoría en los concejos de prácticamente todos los municipios del país.

Tabla 4: Resultados electorales para concejales

Partido político	%
PLC	6.53
FSLN	79.38
PC	0.59
ALN	1.15
APRE	0.72
PLI	11.62

Fuente: CSE, 2012.

2.6. Participación, abstención y legitimidad de los resultados

Desde antes de las elecciones ya se anticipaba que el día de las elecciones se presentaría un alto porcentaje de abstención entre los votantes. De acuerdo a una encuesta de CID-Gallup realizada en septiembre de 2012, un 30% de ciudadanos mayores de 16 años afirmaron que era “poco o nada probable” que participaran en las elecciones municipales y solamente el 28% de afirmó su decisión de votar. Por otra parte, el 39% de los entrevistados respondieron que era “algo probable” que acudieran a votar (Pantoja, 2012).

Efectivamente, tanto los informes del CSE y los de distintos observadores electorales nacionales dieron cuenta de altos porcentajes de abstención el día de las votaciones. Inicialmente, el presidente del CSE, Roberto Rivas, anunció un porcentaje de participación del 46.1 %, lo cual indicaba claramente que el porcentaje de abstención era superior al 50 % del padrón electoral. Sin embargo, en el último informe aseguró que el porcentaje de participación había sido del 57.7 %, uno de los más altos en los procesos electorales del país (Enríquez & Miranda, 2012).

Por su parte, los informes emitidos por (Etica y Transparencia, 2012) e (Ipade, 2012), indican que la participación ciudadana disminuyó durante este proceso electoral y en consecuencia, se incrementó significativamente la abstención. De acuerdo con (Ipade, 2012, págs. 31-32): “Usando el padrón activo más el listado pasivo: suman 4.481,657 millones de electores. La participación es del 44.5 %

y la abstención del 54.4 %, lo que representa un 10 % más de abstención que la elección del 2008, que fue del 44 % con un 56 % de participación. Los datos reflejan que con 2.090,167 votantes en 2012 se votó menos que en el 2008 cuando participaron 2.187,782 electores, (97,615 -), y pese al crecimiento del padrón en más de 400,00 electores del 2008 a la fecha. Esto indica un estancamiento en la participación ciudadana que estadísticamente debería incrementarse proporcionalmente. No creció la participación, se votó menos y se abstuvo un 10 % más”.

Por su parte, (Ética y Transparencia, 2012), documentó cuatro casos de fraude electoral en los municipios de El Almendro, Matiguás, Ciudad Darío y Nueva Guinea. Además, afirmó que en 66 municipios más también se cometió fraude al negarles a los ciudadanos su derecho al voto por diferentes razones.

La legitimidad de los resultados electorales y del sistema electoral en su conjunto, comenzó a ser cuestionada casi inmediatamente después de finalizado el proceso. Diversos actores y organizaciones se pronunciaron públicamente al respecto⁸ argumentando que el sistema electoral había colapsado totalmente y que es urgente una profunda transformación del mismo. Pero, más grave aún, los episodios de violencia electoral se extendieron y escalaron al menos en cuatro municipios inmediatamente después del 4 de noviembre (Miranda, 2012). Los episodios más violentos se han registrado en La Paz Centro⁹, Ciudad Darío¹⁰, Matiguás¹¹ y Nueva Guinea¹². En el caso de Nueva Guinea, la violencia electoral se incrementó durante los días 18 y 19 de noviembre, posteriores a las elecciones, cuando simpatizantes del PLC organizaron una marcha de protesta en el municipio y la Policía Nacional junto con simpatizantes del FSLN los sitiaron en la sede del partido. De acuerdo con (lepp, 2012), como consecuencia de la violencia electoral 3 personas fueron asesinadas, 20 personas fueron lesionadas, 27 más fueron detenidas y se produjeron daños materiales en diferentes lugares del país, sin contar los numerosos heridos y detenidos en los incidentes de Nueva Guinea.

III. El estado de la democracia y la gobernabilidad

Tal como se dijo antes, durante los últimos cinco años el proceso político del país ha estado marcado por una tendencia autoritaria que ha significado un grave retroceso para la democracia y para los modelos de gobernabilidad democráticos. La forma en que se desarrolló el proceso de elecciones para las autoridades municipales y sus resultados terminaron de sellar la esencia autoritaria de la tendencia. Los puntos críticos de esa tendencia son, entre otros:

La naturaleza del régimen político

Es evidente que el régimen político del país se ha reconfigurado y se ha convertido fundamentalmente en un régimen autoritario y de facto donde prevalece la discrecionalidad, un estilo de gobierno al margen de la ley y la subordinación de los demás poderes del Estado a la figura del ejecutivo. Desde que tomó posesión de la presidencia en el 2007 hasta la fecha, Daniel Ortega ha cometido al menos 86 violaciones graves a la Constitución, sin contar las constantes violaciones a otras leyes del país y la invasión de funciones a los demás poderes estatales como la Asamblea

⁸ Ver, por ejemplo, el pronunciamiento del (GPPE, 2012), integrado por 14 organizaciones de sociedad civil.

⁹ Ver: (López E. , 2012), (Córdoba, 2012) y (Miranda Aburto, 2012).

¹⁰ Ver: (Miranda Aburto, 2012) y (García, 2012)

¹¹ Ver: (Mendoza, 2012) y (Martínez L. , 2012).

¹² Ver: (Alvarez R. , 2012), (Oporta Vásquez, 2012) y (Miranda Aburto, 2012). Y sobre los incidentes posteriores de violencia electoral: (López I. , 2012), (Duarte, 2012) y (Oporta, 2012).

Nacional, la Corte Suprema de Justicia y especialmente, el Consejo Supremo Electoral. De esa manera, el margen de actuación de estas instituciones se ha reducido sustancialmente y se rompió el necesario balance de poderes en el país.

La interrogante pendiente sobre la ruptura entre legalidad y legitimidad quedó dirimida y totalmente verificada con los resultados de las elecciones presidenciales del 2011 y estas elecciones municipales una vez que Ortega ha impuesto su voluntad sobre los gobiernos locales y ha logrado el control prácticamente de todos los municipios en el país. Así, se ha allanado completamente el camino para el ejercicio del poder absoluto.

Dos actores clave en este cambio son el ejército y la policía, quienes han comenzado a jugar un papel de coerción y represión más beligerante en función de controlar las expresiones de descontento y disenso ente la ciudadanía¹³. La actitud subordinada que han asumido durante los últimos meses está provocando un cambio en la percepción que la sociedad nicaragüense tiene sobre ellas. A partir de esas evidencias, a toda la sociedad nicaragüense y particularmente a los actores del sistema político, se les plantea el reto de actuar para revertir esta tendencia y abrir nuevamente una oportunidad para la construcción de la democracia en el país. El reto interpela directamente a las fuerzas de la oposición en relación a la formulación de una nueva propuesta a la sociedad, renovar sus liderazgos y estrategias de acción política, sobre todo porque el sistema electoral ha colapsado y la estrategia de ocupar espacios de poder a través de este mecanismo ya no cuenta con las garantías suficientes.

Gobiernos locales, autonomía municipal y desarrollo

Con los resultados de este proceso electoral también ha quedado claro el panorama de la gestión municipal en el país. Desde el inicio de su presidencia, Daniel Ortega buscó la subordinación total de los gobiernos municipales a la estrategia de centralización del poder y control total en su propia figura. Sin embargo, en el 2007 no tenía el control sobre la totalidad de los gobiernos municipales. Avanzó un paso más con el fraude electoral del 2008 que no solamente fue un intento de aumentar el número de gobiernos municipales bajo su control, sino también un ensayo para el fraude electoral del 2011.

En este ejercicio electoral del 2012, Ortega se propuso el control del total de gobiernos municipales, a eso se dirigieron sus acciones desde mucho antes que iniciara la campaña electoral. El interés en este tipo de control no se limita al ejercicio puro y duro del poder, sino que también se relaciona con aspectos muy prácticos como el control de los recursos y la gestión pública local. Aún más, el fin último es el control de los ciudadanos en el ámbito más local, más cercano a su vida cotidiana en tanto ese nivel de gobierno es el que más cerca de esos ciudadanos.

En esa estrategia de control ciudadano, los gobiernos municipales juegan un nuevo rol, muy distinto del que venían adquiriendo con los procesos de autonomía y fortalecimiento de la gestión municipal. En el esquema de Ortega, los gobiernos municipales son simples ejecutores de la voluntad presidencial y parte de un mecanismo complejo de control y subordinación que incluye la distribución de los recursos para la fidelización de ciertos grupos útiles a la pareja presidencial.

Sin embargo, los efectos sobre la sociedad nicaragüense en general, son nocivos en tanto anulan la autonomía de los gobiernos municipales, restringen la gestión municipal a la distribución de recursos populistas, frena los procesos de desarrollo local que se habían iniciado en años anteriores y anula los procesos de participación ciudadana a nivel local.

¹³ Ver la actuación de la Policía y el Ejército en los incidentes en Matiguás, Ciudad Darío y Nueva Guinea, así como la militarización de los municipios con mayor violencia electoral por parte de la institución militar.

Las fuerzas de oposición

Uno de los actores a quien se le plantean los retos más importantes después de estas elecciones municipales, es a la oposición. Esos retos se refieren a su propia constitución como actores políticos y a sus acciones respecto al gobierno. En el primer caso, la oposición en Nicaragua tiene que reconocer que se encuentra fraccionada y que tiene fuertes diferencias en sus posicionamientos frente al gobierno. Además, no todos los que se llaman oposición son verdaderamente consistentes con ese planteamiento, pues hay algunas agrupaciones políticas que se prestan fácilmente a respaldar las posiciones gubernamentales a cambio de beneficios y comodidades; otros grupos sencillamente se han acomodado y no conciben la acción política fuera del ámbito formal del sistema político. Mientras tanto, otros grupos si tienen posiciones consistentes y firmes de oposición al gobierno, pero no han logrado articular una propuesta clara y creíble para la ciudadanía. En resumen, la oposición se encuentra fraccionada, sin liderazgos claros y creíbles y sin una propuesta frente a la sociedad nicaragüense.

En las pasadas elecciones presidenciales distintas agrupaciones políticas lograron constituir una alternativa electoral que compitió y obtuvo un alto porcentaje de votos, sin embargo, ese esfuerzo de articulación no logró consolidarse y los grupos volvieron a fragmentarse durante el 2012, especialmente en relación a sus planteamientos sobre las elecciones municipales. Eso provocó que el porcentaje de confianza otorgado por los ciudadanos a la alianza conformada para las elecciones presidenciales pasadas se cayó completamente con las posiciones acomodadas de los líderes de distintos grupos que quieren mantener su status quo y aquellos grupos que se han prestado a hacerle el juego al gobierno en una actitud de neo-zancudos.

El segundo gran reto, entonces, consiste en que algunos, o uno, de los grupos de la oposición pueda formular una estrategia de acción política más allá de las coyunturas electorales y que se constituya en una verdadera alternativa política para la ciudadanía. Este es un reto clave en tanto el sistema electoral ya colapsó y es necesario buscar otras estrategias políticas de más largo aliento y que se orienten verdaderamente a restituir en el país un régimen democrático. Este reto es más urgente en tanto la ciudadanía ha dejado en claro que no tiene confianza en la oposición, en sus liderazgos y en sus propuestas actuales.

Sociedad civil y ejercicio de derechos ciudadanos.

Las acciones del gobierno para controlar a la ciudadanía y las expresiones de disenso descansan en tres ejes: el control/eliminación de la sociedad civil, el control de los medios de comunicación, y la eliminación de cualquier forma o expresión de protesta social. Durante los primeros años de la gestión Ortega, las acciones se enfocaron en la sociedad civil, especialmente entre los años 2008 y 2009 cuando se produjeron los incidentes más graves de intimidación y acoso. Desde entonces y a consecuencia de los altos costos políticos que le tocó pagar, el gobierno ha empleado una estrategia de cooptación e intimidación de baja intensidad que se ha enfocado sobre todo en la suspensión de los fondos de cooperación destinados a las acciones para fortalecer la democracia y la gobernabilidad. Esta estrategia ha resultado exitosa en tanto han logrado que las principales agencias interesadas en estos temas se retiren del país, o bien, suspendan sus programas en estos temas.

Al mismo tiempo han desarrollado acciones beligerantes para asegurar un monopolio sobre los medios de comunicación y controlar a la prensa y el ejercicio periodístico a través de la amenaza, la intimidación y la cooptación de medios y periodistas. Esto tiene como propósito acallar cualquier posibilidad de disenso o de voces críticas, así como la hegemonía total del discurso oficialista.

El tercer eje de la estrategia se refiere a la eliminación y control de cualquier forma de protesta o disidencia. Para eso, el gobierno ha articulado un aparato propio de control ciudadano en los CPC, de tal manera que ordinariamente ejercen una vigilancia continua sobre aquellos considerados “sospechosos”, y que en coyunturas específicas, como las electorales, se activan para reprimir de manera beligerante las manifestaciones ciudadanas de oposición. Así, la violencia política y la represión han aparecido en el escenario político del país, especialmente desde el fraude electoral del 2008, y presenta la tendencia a incrementarse, especialmente por la parcialidad de las actuaciones de la Policía y el Ejército. Basta ver los reportes periodísticos sobre los últimos acontecimientos de estas elecciones municipales. Esto plantea un cambio sustantivo, porque además de reprimir cualquier expresión de descontento político, también se puede observar un uso represivo de la fuerza policial para sofocar las expresiones de conflicto social.

La tendencia de control total sobre la sociedad no parece que va a variar. Por el contrario, es posible suponer que la pareja presidencial mantenga su estrategia de control y utilice nuevos recursos represivos y de coerción contra cualquier expresión de disenso u oposición ciudadana. De esa manera, el país se acerca más todavía a un pasado ya conocido caracterizado por el poder dictatorial y la represión abierta.

Bibliografía

- Agencia EFE. (17 de Octubre de 2012). Magistrados CSE se lavan las manos sobre "candidatos fantasmas". *Confidencial* .
- Alvarez, L. (22 de Octubre de 2012). Candidatos del PLC revelan amenazas de partidarios sandinistas. *El Nuevo Diario* .
- Alvarez, L. (03 de Noviembre de 2012). CSE dice que 88,000 cédulas no fueron retiradas por los ciudadanos a nivel nacional. *El Nuevo Diario* .
- Alvarez, L. (07 de Septiembre de 2012). CSE eliminará fotos de las boletas electorales de las municipales. *El Nuevo Diario* .
- Alvarez, L. (24 de Agosto de 2012). CSE ofrece sus cifras sobre la cedulación. *El Nuevo Diario* .
- Alvarez, L. (01 de Agosto de 2012). Denuncias al menudeo en verificación. *El Nuevo Diario* .
- Alvarez, R. (06 de Noviembre de 2012). PLC denuncia fraude en Nueva Guinea. *La Prensa* .
- Aragón Rodríguez, W. (04 de Noviembre de 2012). Centros de votación de Totogalpa y Yalaguina en manos de sandinistas. *La Prensa* .
- Aragón, W., León, S., & Potosme, R. (15 de Agosto de 2012). Presión contra los dedazos. *La Prensa* .
- Carranza, M. (15 de Octubre de 2012). FSLN mide fuerza política con miras al 4 de noviembre. *El Nuevo Diario* .
- Conferencia Episcopal de Nicaragua. (26 de Septiembre de 2012). Mensaje de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Matagalpa, Nicaragua.
- Córdoba, M. (04 de Noviembre de 2012). Tensión en La Paz Centro. *El Nuevo Diario* .
- Cruz, J., & Potosme, R. (05 de Agosto de 2012). Bronca por dedazos. *La Prensa* .
- Duarte, J. (19 de Noviembre de 2012). Desalojo en Nueva Guinea deja heridos y detenidos. *La Prensa* .
- Enríquez, O., & Miranda, W. (05 de Noviembre de 2012). CSE deja en 134 alcaldías al FSLN. *Confidencial* .
- Etica y Transparencia. (14 de Noviembre de 2012). Informe pos electoral 2012. Managua, Nicaragua.
- Etica y Transparencia. (2012). *Valoración técnica final del proceso electoral para alcaldes y concejales. Nicaragua 2012*. Etica y Transparencia, Managua.
- Etica y Transparencia. (26 de Octubre de 2012). *Viva el Voto*. Recuperado el 11 de Noviembre de 2012, de www.vivaelvoto.com
- García, E. (05 de Noviembre de 2012). Dos muertos y varios heridos dejaron enfrentamientos en Ciudad Darío. *El Nuevo Diario* .
- GPRE. (08 de Noviembre de 2012). Pronunciamiento. Las elecciones municipales y sus consecuencias. Managua, Nicaragua.
- lepp. (2012). *Informe violencia electoral. Elecciones municipales 2012*. lepp, Managua.
- Ipade. (Julio de 2012). *Ipade*. Recuperado el 10 de Noviembre de 2012, de <http://ipade.org.ni/elecciones12/documentos/PRESENTACION-VERIFICACION-CIUDADANA.pdf>
- Ipade. (06 de Agosto de 2012). *Monitoreo al proceso de cedulación ciudadana en los Consejos Electorales Municipales (del 25 de junio al 06 de agosto de 2012)*. Recuperado el 10 de Noviembre de 2012, de Ipade: <http://ipade.org.ni/elecciones12/documentos/InformedeCedulación.pdf>
- Ipade. (2012). *Tercer informe. Elecciones municipales 2012. 07 de noviembre 2012*. Ipade, Managua.
- La Prensa. (02 de Septiembre de 2012). Partidos en guerra tras impugnaciones. *La Prensa* .
- Largaespada, M. (04 de Noviembre de 2012). Expulsan a dos opositores en JRV de La Libertad. *El Nuevo Diario* .
- López Hernández, E., Vargas, L., & Martínez, A. (29 de Octubre de 2012). Violencia en víspera electoral. *La Prensa* .

López, E. (04 de Noviembre de 2012). Simpatizantes del PLI protestan en La Paz Centro. *La Prensa* .

López, I. (19 de Noviembre de 2012). Enfrentamiento deja 20 heridos en Nueva Guinea. *Confidencial* .

Martínez, L. (16 de Noviembre de 2012). Matiguás sitiada. *La Prensa* .

Martínez, L., & López, E. (08 de Agosto de 2012). Rechazan "dedazos". *La Prensa* .

Mendoza, F. (05 de Noviembre de 2012). Simpatizantes del PLI se toman centro de cómputos en Matiguás. *El Nuevo Diario* .

Miranda Aburto, W. (31 de Octubre de 2012). "No hay condiciones para elección libre". *Confidencial* .

Miranda Aburto, W. (17 de Noviembre de 2012). Policía intentó sabotear marcha en Nueva Guinea. *Confidencial* .

Miranda Aburto, W. (06 de Febrero de 2012). Rebelión contra "dedazo" en el FSLN. *Confidencial* .

Miranda Aburto, W. (11 de Noviembre de 2012). Secuela de violencia tras elecciones. *Confidencial* .

Miranda Aburto, W. (04 de Noviembre de 2012). Violencia electoral en La Paz Centro. *Confidencial* .

Miranda, W. (14 de Noviembre de 2012). Fraude provoca máxima tensión en 4 municipios. *Confidencial* .

MRS. (Octubre de 2012). Ante elecciones del 4 de noviembre. (<http://www.canal15.com.ni/videos/47057>). Managua, Nicaragua.

Olivares, I. (04 de Noviembre de 2012). Hagamos Democracia detalla lista de irregularidades. *Confidencial* .

Olivas, R. (04 de Noviembre de 2012). Más fallecidos aparecen en padrón electoral de Chinandega. *El Nuevo Diario* .

Oporta Vásquez, J. (10 de Noviembre de 2012). Marcha sin incidentes en Nueva Guinea. *El Nuevo Diario* .

Oporta, J. (19 de Noviembre de 2012). Policía desaloja a simpatizantes del PLC en Nueva Guinea. *El Nuevo Diario* .

Pantoja, A. (11 de Octubre de 2012). Abstención e indecisión ante municipales. *El Nuevo Diario* .

Picón Duarte, G. (02 de Octubre de 2012). Ipade: anomalías en cedula. *La Prensa* .

Picón Duarte, G. (02 de Agosto de 2012). Ortega bendice cifras del CSE. *La Prensa* .

Picón, G., & Martínez, S. (15 de Octubre de 2012). FSLN entrena a su militancia. *La Prensa* .

Potosme, R. (31 de Agosto de 2012). Soberana mentira del CSE. *La Prensa* .

Rivera, F. (23 de Octubre de 2012). Denuncian uso de "ratón loco". *La Prensa* .

Sirias, T. (01 de Agosto de 2012). Manipulan padrón electoral. *La Prensa* .

Trinchera de la noticia. (25 de Octubre de 2012). CSE "escamotea" carnés a opositores. *Trinchera de la noticia* .

Vásquez, M. (04 de Noviembre de 2012). PLI denuncia irregularidades en Tipitapa. *La Prensa* .